ANTE LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA

Los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de Noviembre, demuestran nuevamente una de las características esenciales del gobierno de Belisario Betancur: la gran distancia entre sus palabras y sus acciones. El Presidente de la Paz y del Diálogo; el hombre culto y letrado, como hasta hace poco era presentado Betancur ante los colombianos, pasará a la historia como uno de los gobernantes más sanguinarios y asesinos que haya ocupado el solio presidencial, con muy poco que envidiarle a los Pinochet, los Videla y demás sátrapas del subcontinente latinoamericano.

Es Belisario Betancur y el gobierno que preside el único responsable de esta tragedia. Era él el único que podía evitarla con solo mostrar una mínima disposición a entablar conversaciones con el Comando guerrillero del M-19 que se tomó el Palacio. Realmente no es nueva esta faceta del supuesto demócrata Betancur. A comienzos de la década del 60, siendo Ministro del Trabajo, ordenó la represión contra los obreros de Cementos El Cairo, en Santa Bárbara (Antioquia), con un saldo de varios obreros asesinados. El casi centenar de muertos, entre Magistrados, guerrilleros y empleados de la Corte, son el último botón de muestra de su verdadera concepción «democrática» y de su real voluntad de paz, de justicia y de diálogo.

En el último tramo de su mandato, Belisario deja claro ante el pueblo colombiano que la única paz en la que está interesado es la paz de los sepulcros y que la disposición de diálogo que le queda es aquella que sale del cañón de los fusiles y de las ametralladoras de sus Fuerzas Armadas, hoy adueñadas de la conducción y ejecución prácticas de su política de paz. Con los acontecimientos de la Plaza de Bolívar queda definitivamente sellado el fracaso de esta política de paz. Después de esta acción antipatriótica, ¿con qué autoridad moral y política puede Belisario Betancur continuar hablando de paz y de diálogo?. Para el pueblo colombiano queda claro que no es con peroratas demagógicas sobre la paz ni con diálogos por lo alto como ésta se consigue. Queda demostrado que sin reformas económicas, sociales y políticas profundas que favorezcan al pueblo y den solución a sus más ingentes problemas, no será posible desarrollar por cauces pacíficos la lucha por los cambios revolucionarios que Colombia necesita. Y la cada vez más desembozada salida militarista que el gobierno le está dando a las demandas populares no hará nada distinto a empeorar las cosas.

Como era de esperarse, los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, los distintos gremios económicos de la oligarquía (ANDI, SAC, FENALCO, FEDEGAN, etcétera), la jerarquía eclesiástica y la burguesía internacional han cerrado filas alrededor de su Presidente y en defensa de sus instituciones. No podía ser de otra manera. El gobierno actual representa y defiende los intereses de los poderosos capitalistas y terratenientes y sus voceros políticos y religiosos. Y en la defensa de estos intereses poco les importa las víctimas humanas que haya que sacrificar. Por ello a Belisario no le tembló la voz para ordenarle a sus Fuerzas Armadas entrar a sangre y fuego al Palacio de Justicia y consumar el mayor crimen de Estado que recuerde la Patria en el último cuarto de siglo: 11 Magistrados, 35 guerrilleros y otros tantos empleados de la Corte asesinados en aras de «salvar las instituciones», es decir, su Poder.

De poco valdrán los esfuerzos mancomunados de la Gran Prensa, de las principales cadenas radiales y de algunos programas de televisión, que actuando como corifeos del régimen, tratan de desvirtuar el nítido sentido revolucionario de la acción del M-19, haciéndola aparecer como una operación de «terroristas demenciales» al servicio de los narcotraficantes y como asesinos de los Magistrados. Por siempre quedarán grabadas en la memoria de los colombianos las tristes imágenes de los vehículos blindados «Urutú» y «Cascabel» entrando al Palacio de Justicia, derribando y destruyendo a cañonazos todo lo que encontraban a su paso, incluyendo las vidas de los Magistrados, de los guerrilleros y de los empleados de la institución. Los colombianos tenemos claro que fué la acción de los efectivos militares y policiales - ese sí demencial y típico terrorismo de Estado!- la que segó las vidas de valiosos juristas y de abnegados luchadores populares. Son Belisario Betancur, sus Fuerzas Armadas y su Gobierno quienes deben responder ante la nación por el asesinato de estos valiosos compatriotas.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, entiende que es al pueblo colombiano a quien corresponde juzgar al gobierno de Belisario Betancur. Y bien que lo ha venido haciendo. El Paro Cívico Nacional del 20 de Junio; las Marchas campesinas hacia Cartagena, Barrancabermeja, Sincelejo y Montería; las huelgas obreras y la lucha de los trabajadores bancarios; los paros cívicos de El Guavio y Guamalito y los que se preparan en el Oriente colombiano y en Boyacá, son una muestra contundente del rechazo popular a las ejecutorias de Betancur. Ese ha sido su juicio y su fallo, y es por esa vía por donde debe continuar enjuiciándose la política de Belisario Betancur. Actualmente la lucha de masas debe ser el filo principal del combate popular por alcanzar mejores condiciones de vida y por ampliar el espacio democrático existente. Las acciones guerrilleras, por más contundentes que ellas sean, deben estar al servicio de estas luchas, partir de ellas, favorecerlas, impulsarlas, encauzarlas; pero nunca colocarse por encima de las mismas, porque corremos el riesgo de sobrepasar el real nivel de conciencia de las masas y aislarnos de ellas.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, manifiesta su solidaridad con los compañeros del M-19 y llama al pueblo y a sus organizaciones a expresar por diversos medios y formas su rechazo a la política de paz de BelisarioBetancur y al tratamiento dado a la toma del Palacio de Justicia. Desechar toda ilusión de que por vía del diálogo serán posibles las reformas en Colombia; colocar en primer término la lucha de las masas por sus reivindicaciones más sentidas; darle continuidad a las luchas por conquis-

tar los puntos del Pliego unificado del paro cívico nacional; acentuar y cualificar los pasos unitarios del movimiento revolucionario y guerrillero, presentando al pueblo alternativas políticas que encaucen sus luchas cotidianas hacia los cambios que el país reclama; denunciar como farsa la contienda electoral en marcha; poner las acciones guerrilleras al servicio de todos estos pasos: he ahí las principales tareas de los revolucionarios en la hora actual!

¡¡HONOR Y GLORIA A LOS COMBATIENTES CAIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA!!

¡¡VIVA LA UNIDAD REVOLUCIONARIA Y POPULAR!!

Partido Revolucionario de los Trabajadores
Secretariado Nacional.
Noviembre 10 de 1985.

La Dirección Nacional del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia (P.R.T.) suscribe públicamente la siguiente Declaración que se ha puesto en consideración del movimiento popular. Por compartir su contenido y como homenaje a los hermanos del M-19 caídos en combate invitamos a las fuerzas revolucionarias y a las organizaciones del pueblo a suscribirla difundiéndola ampliamente para aclarar el verdadero significado de esa vil masacre.

DIRECCION NACIONAL
P.R.T.
11 de Noviembre de 1985

DECLARACION CONTRA LA MASACRE COMO INSTRUMENTO DE PODER: DE PIE POR EL DERECHO A LA VIDA Y LA DEMOCRACIA!

El Presidente de la República, su gabinete y los altos mandos de las FFAA rechazaron cualquier negociación con los guerrilleros del M-19 que tomaron el Palacio de Justicia. El gobierno decidió solucionar a sangre y fuego la ocupación de este 6 de noviembre de 1.985.

No importaron los llamamientos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia para un cese de fuego que permitiera dialogar. Desde el primer momento Belisario Betancur optó por la solución militar y a la 1:30 de la tarde del mismo miércoles 6 autorizó el ingreso de las tanquetas que, con indiscriminado accionar de sus metrallas y cañones, indicaron la decisión de pasar por encima de Magistrados y funcionarios para doblegar al comando guerrillero.

Los hechos y resultados del 7 de noviembre están a la vista. Con el argumento de defensa de la democracia se rechazó el diálogo y la negociación. Con el pretexto de defender la justicia se sacrificaron 16 Magistrados y una centena de colombianos. El Palacio de Justicia fue demolido por los cañones, el incendio provocado en la confrontación consumió lo más significativo de la tradición jurídica del país.

Ni siquiera el criterio de autoridad, de preservación institucional entendido de la manera más rígida, podría justificar los métodos sanguinarios utilizados. En otras ocasiones la negociación se respaldó en criterios institucionales. Y si no es así, por qué se negoció una tregua? Por qué se negoció en Yarumales en diciembre del 84? Por qué se negoció en la Embajada de República Dominicana?

Esta masacre tiene pocos puntos de comparación en la historia de América Latina y de Colombia. Actos similares fueron ejecutados por las dictaduras del Cono Sur o se encuentra en episodios como el genocidio de campesinos en Guatemala o la matanza de Santa María de Iquique. En nuestra patria figura al lado de la masacre de las Bananeras, de los sucesos del 9 de abril del 48, de los cruentos episodios de la Casa liberal de Cali, o de la Plaza de Toros cuando la dictadura de Rojas.

En el expediente del ejercicio del poder por Belisario Betancur lo acontecido en el Palacio de Justicia tiene como antecedente la matanza de Santa Bárbara, en febrero de 1.964, cuando era Ministro de Trabajo.

Los demócratas, los ciudadanos con postura política abierta, los intelectuales y trabajadores colombianos no podemos guardar silencio ni utilizar el juicio crítico a la toma del M-19, por más sustentado que pueda ser, para matizar o disimular la condena a la política de sangre y fuego del gobierno y de las FFAA.

El menosprecio por la vida se ha impuesto como criterio ordinario. Los fusilamientos sin fórmula de juicio, los bombardeos indiscriminados en zonas campesinas e indígenas, la actuación de grupos paramilitares que continúan su trabajo sucio. Tal es el accionar cotidiano que se quiere compaginar con una abstracta reivindicación del Estado de Derecho.

No hay espacio ni tiempo para la indiferencia, ni basta el recurso a las lamentaciones. Es necesario que se ponga en marcha un Gran Movimiento por la Democracia y el Derecho a la Vida, un movimiento que rechace la masacre como instrumento de poder.

Basta de consideraciones pusilánimes de intelectuales demócratas siempre a la espera de que otros les construyan la tribuna!

Basta de las mezquindades de los sindicalistas que se quedan reducidos a las reclamaciones y negociaciones de pliegos!

Basta de los discursos inmovilizadores de quienes se reclaman depositarios de la verdad o guardianes del cambio, pero que subordinan todo a la posibilidad de control absoluto sobre cualquier acto!

Que las palabras de descontento de todos los días, la inconformidad callada o a gritos de tantos, se convierta en acción por la Democracia.

Señor Belisario Betancur: Ha escrito Ud. otra página en la historia de la infamia y, por lo pronto, como Lady Macbet ha asesinado hasta su propio sueño.

Sr. Presidente: La palabra diálogo, paz o democracia tiene un extraño sonido macabro en sus discursos.

La verdadera democracia, la democracia de la calle y de la esperanza hoy está dolida por la barbarie del poder que en la hora crucial negó un cese al fuego y una negociación.

Colombia está de duelo por tantos hermanos caídos.

DE PIE POR EL DERECHO A LA VIDA Y LA DEMOCRACIA!!